Autodefensas mexicanas

CIUDAD DE MÉXICO, 7 de marzo del 2023

En febrero de 2013, cientos de habitantes armados se reunieron en el corazón de la región de Tierra Caliente. Se autodenominaron «Autodefensas de Michoacán» y afirmaron que combatirían y acabarían con los Caballeros Templarios, una organización criminal que dominaba la mayor parte del estado.

Diez años después de que las autodefensas se alzaran para restablecer la paz y la seguridad, Michoacán sigue siendo una zona crucial para la importación y el tráfico de cocaína, la producción de metanfetaminas y la extorsión a empresas locales así como a agroindustrias de exportación multibillonarias, como las de producción de limón, frutos rojos y aguacate. Durante esta década, la región se ha mantenido entre las cinco más violentas de México, con una tasa de homicidios de 51 por cada 100 000 habitantes en 2022, además de ocupar el primer lugar en desplazamiento forzado interno en 2021, con 13 515 personas desplazadas.

¿Cómo ha evolucionado el panorama de violencia en Michoacán en la última década? ¿Por qué se han multiplicado los grupos de autodefensa? ¿Qué relación tuvieron con grupos delictivos y autoridades públicas? ¿Qué papel desempeñan en la gobernanza de regiones históricamente marcadas por la guerra contra el narcotráfico?

Basado en 10 años de investigación y trabajo de campo, nuestro nuevo informe **Diez años de vigilantes: Las autodefensas mexicanas**, se centra en la naturaleza política del movimiento de las autodefensas, con el objetivo de extraer preguntas fundamentales para la gobernanza y la seguridad pública en México.

El informe muestra cómo las relaciones entre autoridades, actores criminales y grupos civiles armados producen una constante inestabilidad que plantea enormes retos a las estrategias de seguridad pública y de prevención y reducción de la violencia a nivel local. Así, analizamos cómo los diferentes Gobiernos en turno, al mantener diálogos y apoyos –formales e informales– a líderes –armados o no– sin consolidar instituciones y capacidades sólidas para la reducción de la violencia, han indirectamente contribuido a convertir a intermediarios violentos en operadores cruciales para la gobernanza local. Esto, a su vez, ha fomentado una forma de externalización de la seguridad pública, puesta en manos de líderes que, a la larga, compiten por intereses y recursos locales – lícitos e ilícitos– a la vez que pelean por mantener su posición como aliados e interlocutores del Gobierno, alimentando los ciclos de violencia e inestabilidad.

De hecho, los niveles de conflictividad observados en Michoacán en los últimos 10 años demuestran que las autoridades no han encontrado estrategias para reducir la violencia sistémica. Tampoco han podido evitar la fragmentación territorial de la región, actualmente dividida en decenas de feudos sobre los que caciques locales ejercen un inmenso control social, político y económico.

Cuando las autoridades no logran ofrecer respuestas transparentes y eficientes en materia de seguridad y justicia, contribuyen a delegar tareas gubernamentales a los jefes locales. Aunque esta decisión pueda parecer eficiente a corto plazo – por ejemplo, si contribuye a un repentino descenso de los homicidios en ciertos territorios –, la consolidación del poder de estos líderes informales deslegitima al Estado como único garante del orden y la seguridad, y exime a las autoridades de sus obligaciones frente a la ciudadanía.

A la larga, las consecuencias son dramáticas para la vida social y democrática a nivel local y regional. Dentro de los territorios dominados por actores violentos, resulta cada vez más difícil que las autoridades, pero también iniciativas de la sociedad civil, propongan alternativas a líderes armados, reduciendo así la participación y representación política, y promoviendo el uso de las armas como recurso clave para la gobernanza. Por ende, en estas regiones, hacer política sin armas se convierte en una actividad extremadamente peligrosa, e incluso imposible.

El informe plantea tres ideas clave:

* A pesar de la eficiencia y legitimidad de las cuales puedan gozar ciertos grupos de autodefensas, la seguridad pública no puede quedar en manos privadas. Es tarea de los diferentes niveles de Gobierno hacerse cargo de sus responsabilidades en materia de prevención, atención y reducción de la violencia. Por eso resulta crucial que los gobiernos federal y estatal continúen sus esfuerzos institucionales en materia de seguridad pública civil, con un compromiso institucional a largo plazo (por ejemplo, a través del Fondo para el Fortalecimiento de la Paz iniciado por el Gobierno de Michoacán y destinado a apoyar la formación, certificación y equipamiento de los policías municipales del estado).
* Al fallar en la institucionalización y sostenibilidad de las estrategias de seguridad pública, las autoridades indirectamente contribuyen a la consolidación de líderes informales, abriendo la puerta a que estos actores puedan proveer servicios paralelos o alternativos de protección, resolución de conflictos y acceso a recursos, así como de imponer su dominio a través del control de mercados lícitos e ilícitos, extorsión y cobro de piso, y el control sobre la vida política local.
* Los acuerdos informales entre autoridades públicas y líderes locales tienen consecuencias políticas graves, alimentando inestabilidad crónica y largos ciclos de violencia. Peor aún, contribuyen a limitar o cerrar los espacios políticos abiertos para la participación y movilización ciudadanas. En otras palabras, se vuelve cada vez más peligroso participar en la vida democrática y social a nivel local (como lo demuestran los asesinatos de activistas, personas defensores, periodistas y funcionarios). Así, varios actores políticos y activistas consultados en Michoacán afirmaron que las actuales condiciones de inseguridad les impiden participar en cualquier actividad pública.

Estas dinámicas, sin embargo, no pueden examinarse desde Ciudad de México, sino que requieren una inmersión profunda en las comunidades locales. Por extensión, las soluciones políticas seguirán siendo inalcanzables en ausencia de diagnósticos cuidadosos y oportunos de las situaciones y crisis locales, y de un fuerte compromiso de las autoridades municipales, estatales y federales con la transparencia y la rendición de cuentas en la construcción de respuestas a la violencia y la inseguridad.

El informe **Diez años de vigilantes: Las autodefensas mexicanas** está disponible en inglés y en español. Léelo aquí.

Si estás interesado en cubrir este tema o en platicar con el autor, Romain Le Cour Grandmaison, experto sénior de GI-TOC, escríbenos a latam@globalinitiative.net.

**Sobre The Global Initiative Against Transnational Organized Crime**

GI-TOC es una organización internacional sin fines de lucro compuesta por una red de más de 600 expertos independientes en el ámbito regional e internacional. GI-TOC busca proponer nuevas líneas de análisis para ofrecer soluciones creativas a los retos del crimen organizado, y servir como plataforma de colaboración e intercambio entre Gobiernos, miembros de la sociedad civil, académicos, miembros del sector privado y otros actores. Fundada en el 2013 y con sede en Ginebra, GI-TOC tiene representación en cada continente (más información [aquí](https://globalinitiative.net/about-us/our-story/)).

**Sobre GI-TOC Latinoamérica**

Los cimientos del trabajo de GI-TOC en la región comenzaron en 2017 con el lanzamiento del proyecto #GIResiliencia en México, una iniciativa piloto para documentar las respuestas comunitarias al crimen organizado e impulsar la resiliencia local ante el mismo. El objetivo de GI-TOC en Latinoamérica es avanzar en políticas que contrarresten al crimen organizado y construyan resiliencia comunitaria a través de un enfoque basado en derechos humanos. Además, a través del Fondo Resiliencia, nuestra organización ha apoyado proyectos de prevención del crimen e iniciativas de resiliencia comunitaria con organizaciones de base y miembros de la comunidad.

Actualmente, la presencia de GI-TOC en la región abarca 11 países: México, Guatemala, Honduras, Haití, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil y Paraguay (más información [aquí](https://globalinitiative.net/initiatives/gitoc-latam/)).